



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: LUZ MABEL COLORADO ZAPATA
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES; SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
Radicado: 05001 31 05 015 2019 00307 01
Sentencia: S-070

AUTO

En atención a la escritura pública 3377 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial al Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, T.P. 103.505 del C. S. de la Judicatura. Se accede además a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor del Dr. LUÍS EDUARDO GÓMEZ SÁNCHEZ, portador de la T.P. N° 339.879 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

De otro lado, en atención a la escritura pública 885 del 28 de agosto de 2020 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial de PORVENIR S.A. al Dr. ESTEBAN OCHOA GONZÁLEZ, T.P. 331.096 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de marzo de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

LUZ MABEL COLORADO ZAPATA demandó a PORVENIR S.A., a COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar los aportes recibidos, con los rendimientos financieros y sin descuento alguno por cuotas de administración. Pretende además se condene en costas a las accionadas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 3 de mayo de 1960; que en toda su vida laboral cuenta con más de 1737

semanas de cotización; que luego de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, fue afiliada a COLFONDOS S.A.; que posteriormente se trasladó a la AFP HORIZONTE; que en ese momento no se le explicó que la pensión era por capital, ni le indicaron los requisitos para acceder a una pensión anticipada o situaciones relacionadas con el riesgo financiero y el tiempo mínimo de permanencia; y que la información suministrada por los fondos privados no fue adecuada, suficiente, clara, comprensible, oportuna y cierta, donde objetivaran las ventajas y desventajas de ambos regímenes.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante y el total de semanas cotizadas en toda su vida laboral, indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso además a las pretensiones teniendo en cuenta que la afiliación de la demandante a la AFP PORVENIR S.A. se realizó de manera correcta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de la ley 797 de 2003. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, imposibilidad de aplicar precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

COLFONDOS S.A. también se opuso a las pretensiones de la demandante indicando que al momento del traslado, sí le suministró a la demandante una asesoría integral y completa respecto de todas las implicaciones de su decisión. Frente a los hechos acepta la fecha de nacimiento, la afiliación a esa entidad y el posterior traslado a la AFP PORVENIR S.A., agregando que la afiliación a esa entidad se produjo como consecuencia de una decisión informada y consciente, dejando expreso su consentimiento en el respectivo formulario que se suscribió. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de

vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la afiliación y prescripción.

PORVENIR S.A. a su turno, acepta únicamente lo relacionado con la afiliación de la demandante a esa entidad, pero aclara que ese hecho ocurrió con la suscripción del formulario a la AFP HORIZONTE S.A. el 22 de agosto del año 2000, el cual se efectuó en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época, efectuándose la debida asesoría. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda insistiendo en el hecho de haber cumplido con todos los requisitos de ley al momento de la afiliación de la demandante. Como excepciones propuso prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 11 de marzo de 2020, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín i) DECLARÓ la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por las AFP COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A.; ii) ORDENÓ a PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, sin incluir otros conceptos, ni cuotas de administración; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas de dinero y reactivar la afiliación de la señora LUZ MABEL al RPMPD; iv) CONDENÓ en costas a todas las entidades demandadas, disponiendo a título de agencias en derecho el valor de \$877.803 a cargo de cada una de ellas.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, la apoderada de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia en lo que tiene que ver con las cuotas de administración, ya que al declarar la ineficacia del traslado, procede también la devolución de

gastos de administración, pues la ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si nunca hubiera existido, por lo tanto no pueden excluirse los gastos de administración que comprenden las mismas cuotas de administración, los porcentajes de seguros previsionales y los aportes al fondo de garantía mínima. Agrega que estas devoluciones deben de ser asumidas con el propio patrimonio del fondo privado y que no pueden compensarse con los rendimientos, porque estos son propiedad de la demandante, los cuales también deben ser trasladados en su totalidad. Adicionalmente, solicita se revoque la condena en costas ya que, si la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, fue atendiendo a una previsión legal, tal como se dijo en los alegatos de conclusión.

La apoderada de PORVENIR S.A., por su parte, cuestiona lo que tiene que ver con la ineficacia del traslado, ya que la demandante tenía la información pertinente y necesaria para la fecha del traslado, que le fue suministrada en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa fecha, sin que para ese entonces existiera el deber de buen consejo y la obligación para las administradoras de realizar un comparativo o incluso de desincentivar la afiliación de los potenciales afiliados. Indica que para la fecha del traslado solo se debía brindar una información acerca del portafolio de servicios, tal cual se realizó en el presente proceso. Señala que la carga dinámica de la prueba se cumplió con base en el interrogatorio de parte efectuado por la accionante y con lo dicho en el escrito de demanda, en el que se manifestó que sí tenía conocimiento acerca de la pensión anticipada y de las garantías dadas por el RAIS.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término concedido a las partes para alegar de conclusión, el apoderado de COLPENSIONES se pronunció solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, en tanto no resulta posible el traslado de régimen por cuanto a la afiliada le faltan diez años o

menos para arribar a la edad mínima pensional, tal y como lo establece el artículo 13 de la ley 797 de 2003. Agrega que con esa decisión se desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y que no es posible acceder a lo que se pretende si se tiene en cuenta que la demandante es una persona plenamente capaz, sin que del acto de traslado se observen vicios del consentimiento, por lo que la afiliación al fondo privado se produjo de manera voluntaria y sin presencia de engaño alguno, puesto que conforme con la autonomía de la voluntad privada, la demandante optó por cambiar de régimen pensional. En cuanto a las costas, no tiene soporte una condena por decretarse la ineficacia del traslado de régimen, pues la entidad ha obrado de buena fe y actúa según lo ordena las características filosóficas de sus funciones, sin que pueda ejecutar hechos prohibidos por la ley

PORVENIR S.A. por su parte, sostiene que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley. Asegura que al momento de realizar el traslado cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues le entregó a la parte actora la información del Régimen en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, y de forma personal al momento de suscribir el formulario de afiliación. Agrega que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación, son obligaciones posteriores, surgidas a partir de los años 2010 y 2014. En caso de dejar en firme la decisión de declarar la ineficacia de la afiliación, solicita se confirme la excepción de traslado de los dineros descontados por gastos de administración, ya que son sumas que tienen por mandato legal una destinación específica que se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993.

Finalmente, la parte demandante manifestó no hacer uso de los alegatos de conclusión y solicitando simplemente se confirme la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por las apoderadas de PORVENIR y COLPENSIONES a través de los respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de ésta última -en los temas restantes- con el objeto de salvaguardar los intereses de la entidad, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia, mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora LUZ MABEL COLORADO ZAPATA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A., quedan en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** LUZ MABEL COLORADO ZAPATA nació el 3 de mayo de 1960; **(ii)** aunque hubo una afiliación al ISS en agosto de 1996, no se reporta ninguna cotización a esa entidad ya que los aportes fueron realizados al RAIS, fl. 79 y 80; **(iii)** el 31 de agosto de 1996 suscribió el formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A., fls. 17; y **iv)** posteriormente se trasladó a la entonces AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A., según formulario de vinculación del 22 de febrero del año 2000, entidad en la que se encuentra afiliada actualmente - fl. 21.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por las AFP COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A., para que, consecencialmente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que

recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales"*

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está contravirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Se advierte además que la decisión en este proceso relacionada con la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, a través de la AFP COLFONDOS S.A., implicaría en un principio que la situación de la demandante retorne a su estado anterior, es decir, sin afiliación alguna a los regímenes pensionales existentes desde la expedición de la ley 100 de 1993, debido a que, tanto para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, como para cuando se realizó la afiliación al RAIS, la señora LUZ MABEL estaba vinculada a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA (fls. 29), sin que se registren cotizaciones al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ni afiliación a caja o fondo de pensiones alguna.

Sin embargo, como dicha entidad actualmente no tiene la calidad de administradora de pensiones y como la intención de la demandante plasmada con la solicitud presentada ante COLPENSIONES en febrero de 2019 según el contenido del documento visible al folio 43, además del contenido de la presente demanda, es la selección del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, será ésta la entidad encargada de recibirla y de activar su afiliación, pues además así lo permite el ya citado artículo 271 de la propia ley 100 de 1993 cuando dispone que ante una situación que atente contra los derechos del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Norma que se debe complementar con lo establecido en el Decreto 1068 de 1995 por medio del cual se reglamentó la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital y cuyo artículo 2º dispone que una vez entre a regir el Sistema General de Pensiones, *“... los servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el ISS y el RAIS, administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP autorizadas por la Superintendencia Bancaria”*.

Cuotas de administración.

De otro lado, en cuanto a la decisión de la *a quo* de exceptuar otros conceptos de la devolución de los valores recibidos por la administradora con motivo de la afiliación de la demandante como las cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora y los descuentos de garantía de pensión mínima, tema cuestionado en el recurso de apelación por COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la

afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.
(...)”*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos

pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima” (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

*“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.
(...)”*

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si

participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP PORVENIR S.A., que proceda igualmente con el traslado de los porcentajes descontados por concepto de cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros, comisiones y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora COLORADO ZAPATA estuvo vinculada a esa entidad.

Además, la decisión deberá ser ADICIONADA en el sentido de ordenarle también a la AFP COLFONDOS S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración, sumas adicionales de las aseguradoras, comisiones y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo de vinculación de la demandante en esa entidad.

Condena en costas

Ahora en lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Pero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y a reactivar la afiliación de la demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden

previamente impartida en este proceso, en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación de la demandante.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día 11 de marzo de 2020, pero con las siguientes novedades según se dijo en la parte motiva: **1. La MODIFICA** en el sentido de ordenar a la AFP PORVENIR S.A., que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad; **2. La ADICIONA** en el sentido de ordenar también a COLFONDOS S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad; y **3. La REVOCA** en cuanto condenó en costas a COLPENSIONES, para en su lugar absolverla por este concepto.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 066
del 21 de abril de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fedf3e66f84d11d2c0f86b58bd8d370df857649bbbb3f4bcb1ba784cc7461a4**

Documento generado en 20/04/2021 01:38:29 PM